

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO: 269
RADICACION: 11001-33-35-027-2022-00008-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MARCELO BUENDIA VELEZ
DEMANDADA: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO: Declara impedimento

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022).

El Dr. Marcelo Buendía Vélez, en calidad de ex-Fiscal Especializado de Bogotá, a través de apoderado especial, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se apliquen a su caso los efectos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado No. SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 y se declare la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como remuneración con carácter salarial y su incidencia en la liquidación de sus prestaciones sociales.

En efecto, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 prevé:

*“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los **Jueces de la República**, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993 (...)”* (Negrilla fuera del texto).

Con fundamento en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se expidió el Decreto 57 de 1993¹, en el cual se dispuso:

*“ARTÍCULO 6º. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, **de los Jueces de la República**, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y jueces de instrucción Penal Militar”*² (Negrilla fuera del texto).

Por su parte, el Decreto 53 de 1993, “por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación”, en su artículo 6, dispone que el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los fiscales seccionales se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial.

Finalmente, el artículo 1º de la Ley 332 de 1996 hizo extensivo dicho emolumento a los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos:

¹ Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones.

² Decreto 57 de 1993, el cual fija el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.

*"La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí consagrada, **que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio**, hará parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley".*

Por consiguiente, es claro que en el suscrito servidor concurre la causal de recusación consagrada en el artículo 141, numeral 1, del CGP, aplicable por remisión del artículo 130 del CPACA, toda vez que me asiste un interés indirecto en las resultas del proceso, en la medida en que el asunto se contrae a definir si en la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación debe incluirse como factor salarial la prima especial de servicios del 30%, prestación que, como ya se dijo, fue extendida a los Jueces de la República, condición que actualmente ostento, de modo que eventualmente podría formular igual reclamación, con lo cual se afectaría la imparcialidad que debe caracterizar al funcionario judicial, pues el aludido interés haría que no se preserven la idoneidad suficiente y los atributos de equilibrio y neutralidad que deben guiar la función judicial.

Ahora bien, el artículo 131 del CPACA dispone:

"Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

- 1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.*
- 2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el Tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto (...).".*

A su turno, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022, por el cual se crearon dos juzgados administrativos transitorios en el Circuito Judicial de Bogotá para el conocimiento de los procesos relacionados con las reclamaciones salariales y prestacionales contra la Rama Judicial y entidades con régimen similar, que les remitan los Juzgados Administrativos permanentes de la Sección Segunda de Bogotá cuando sus titulares se declaren impedidos.

Por consiguiente, procedería la remisión de este proceso a los juzgados transitorios de la Sección Segunda de Bogotá para que decidan si es fundado el impedimento expresado por el suscrito y dispongan lo pertinente, pues no sería razonable enviar el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que lo califique, cuando existen jueces transitorios creados exclusiva y temporalmente para conocer procesos de esa especie, pues el único evento en el cual le correspondería a esa Colegiatura declararlo fundado o no, sería cuando todos los jueces, incluidos los transitorios, no avoquen o se separen del conocimiento del proceso por estar inmersos en una causal de recusación, situación poco probable porque la creación de los juzgados temporales se inspiró en la necesidad de impulsar ese tipo de asuntos, represados precisamente por los impedimentos de los jueces.

Ahora, teniendo en cuenta que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, con sustento en las reglas de distribución previstas en el artículo 3 del Acuerdo No. CSJBTA21-44 del 9 de junio de 2021, dispuso que los Juzgados Administrativos Permanentes del Circuito de Bogotá, correspondientes a los números 19 al 30, remitirían los aludidos procesos al Juzgado Segundo Transitorio de la Sección Segunda, se procederá a enviar el presente asunto a dicho estrado judicial.

En consecuencia, se dispone:

PRIMERO: MANIFESTAR mi impedimento para conocer y tramitar el presente asunto.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al Juez Segundo Transitorio de la Sección Segunda de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá para que califique mi impedimento y disponga lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

MFMP